



CIBS

Políticas de bienestar social y desarrollo social para la nueva era

Manifiesto del CIBS para la Segunda
Cumbre Mundial
para el Desarrollo Social 2025

Preámbulo

Nosotros, el Consejo Internacional del Bienestar Social (CIBS), presentamos este manifiesto a las Naciones Unidas, reafirmando nuestra dedicación a la promoción de la dignidad humana, el bienestar, la justicia social y las políticas inclusivas en todo el mundo. Los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (CMDS) celebrada en Copenhague en 1995 establecieron una agenda transformadora que hacía hincapié en las soluciones estructurales para afrontar los principales retos sociales de la época. Sin embargo, a medida que se acerca el final del primer cuarto del siglo XXI, el mundo sigue enfrentándose a una serie de retos complejos, interconectados y, a menudo, en cascada: inestabilidad socioeconómica, crisis medioambientales, rápidos avances tecnológicos y una desconfianza cada vez mayor en las instituciones.

La creciente desigualdad dentro de los países, y entre ellos, tiene profundas consecuencias sociales, económicas y políticas, exacerbando las divisiones sociales y reduciendo la cohesión social general. A medida que aumentan las disparidades de ingresos, los individuos de los grupos de renta más baja se enfrentan a dificultades crecientes para acceder a servicios esenciales como la educación, la sanidad y la vivienda. Esto crea un ciclo de desventajas difícil de romper, que conduce a una pobreza arraigada y limita la movilidad social. Además, a medida que las oportunidades económicas se concentran en los ricos, la clase media se reduce, lo que conduce a una mayor polarización y debilita el tejido social que mantiene unidas a las sociedades.

La urgencia de cumplir los compromisos de la Cumbre de Copenhague nunca ha sido tan apremiante. La próxima Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social 2025, que se celebrará en Doha (Qatar), no es una mera oportunidad; es una llamada a medir y evaluar el progreso mundial, a hacer balance de nuestros fracasos, a colmar las lagunas en la aplicación de dichos compromisos y a alinear nuestras aspiraciones con las realidades de hoy, así como con los retos y oportunidades del futuro.

Necesitamos un nuevo comienzo, trazar un camino renovado hacia delante.

El panorama actual

Los informes de las organizaciones afiliadas al CIBS en todo el mundo ponen de relieve los efectos adversos del cambio climático sobre la seguridad alimentaria, la salud y la vida humana. Las graves privaciones materiales y sociales siguen aumentando en todo el mundo, afectando incluso a los países de renta alta y empeorando las condiciones de amplios segmentos de la población, incluidos los grupos desfavorecidos y la clase media. El aumento del coste de la vida y la creciente desigualdad han empujado a millones de personas a la pobreza, incluso en regiones que experimentan un crecimiento económico. Estos desequilibrios exigen algo más que medidas temporales. Subrayan la urgente necesidad de políticas integradoras y centradas en las personas que trasciendan las crisis a corto plazo y aumenten la resiliencia ante ellas.

El cambiante panorama político, marcado por la polarización política y el impacto desproporcionado de las redes sociales con fines lucrativos, sobre todo entre los votantes más jóvenes, ha introducido una importante incertidumbre en la gobernanza. En muchos países, la insatisfacción de los votantes con las promesas incumplidas y los compromisos políticos ha exacerbado los retos para la cohesión social y la provisión de bienestar. [1]

Los modelos de democracia, basados en principios fundacionales y que reflejan el modo en que las naciones alcanzan el bienestar, la estabilidad y la cohesión social, deben reconocer intrínsecamente las diferencias culturales y los entornos sociales únicos de las sociedades. Cuando se examinan de forma global –más allá de un enfoque limitado a los sistemas electorales–, estos modelos deben ser adaptados por cada país de acuerdo con sus tradiciones, culturas y contextos políticos. Este enfoque garantiza que los marcos democráticos se ajusten a las experiencias vividas y a los valores de sus electores, fomentando la legitimidad y la resiliencia. La solidaridad es un valor fundamental que debe cultivarse y transmitirse de generación en generación.

Para desarrollar todo su potencial, los medios de comunicación deben dar prioridad a la promoción de políticas basadas en los derechos humanos, en consonancia con los principios establecidos por las Naciones Unidas en el

[1] El término bienestar se refiere a lo largo de este Manifiesto al bienestar general de las poblaciones, y no a los beneficios específicos que pueden concederse a las personas necesitadas.

ámbito social. Mantener estas prioridades es crucial, incluso en medio de acontecimientos políticos adversos como la volatilidad electoral y el auge del populismo. En la era digital actual, el "pensamiento clip" -una tendencia visible de las personas que consumen información en formatos fragmentados y fácilmente digeribles- se ha convertido en la norma imperante. Aunque ofrece comodidad y rápida difusión, a menudo socava el análisis de los hechos y el pensamiento crítico y permite un compromiso superficial. Este fenómeno, amplificado por las plataformas de los medios sociales y las tecnologías digitales, se ve exacerbado por las burbujas de información, el "ruido informativo" omnipresente y otras distorsiones que tiñen el panorama mediático moderno. Esta dinámica suscita gran preocupación por la prevalencia de las cámaras de eco y la erosión del discurso analítico. En este contexto, los medios de comunicación, como "cuarto poder", desempeñan un papel fundamental. Es obvio que unos medios de comunicación social verificados, transparentes, atractivos y seguros son cruciales para fomentar debates informados y el compromiso cívico. Es necesaria una iniciativa de colaboración público-privada para apoyar y potenciar estos esfuerzos.

La cuestión de las garantías sociales dentro de los contratos sociales -la obligación de los gobiernos de velar por el bienestar de sus ciudadanos- está íntimamente ligada a la provisión de bienestar social y a las políticas consagradas en las normas jurídicas fundamentales de una nación. Esta cuestión está profundamente arraigada en las concepciones nacionales de la ciudadanía y sus dimensiones sociales, y refleja el contrato social entre el Estado y su pueblo. Un contrato social basado en la participación ciudadana es esencial para legitimar las instituciones y garantizar la sostenibilidad de los sistemas de bienestar. A su vez, las políticas sociales están determinadas por la compleja interacción de la evolución social, histórica, cultural y económica. Esta dinámica pone de relieve la necesidad de una gobernanza adaptable y sensible al contexto que responda eficazmente a las cambiantes necesidades y aspiraciones de poblaciones muy diversas. En muchos países se reconoce cada vez más que los gobiernos deben desempeñar un papel más proactivo tanto en el apoyo como en la regulación del sector privado, dando siempre prioridad al bien público.

Mediante la integración de estos conocimientos, las sociedades pueden elaborar modelos de gobernanza que no sólo aborden los retos inmediatos, sino que también sienten las bases de un desarrollo sostenible, integrador y

equitativo. Los indicadores económicos, como el PIB, las tasas de desempleo y la inflación, proporcionan información valiosa sobre la salud financiera de una nación, pero no son medidas suficientes del bienestar social. Estos parámetros no reflejan aspectos esenciales de la vida humana, como la salud, la educación, la sostenibilidad medioambiental y la cohesión social. Además, los indicadores económicos no dan cuenta de la calidad de los servicios sociales, el compromiso cívico o la satisfacción vital, que son fundamentales para una sociedad próspera. Para obtener una comprensión global del bienestar, los responsables políticos deben complementar los datos económicos con datos sociales, psicológicos y medioambientales que reflejen las experiencias vividas por los individuos y las comunidades.

Esto plantea cuestiones críticas:

- ¿Qué tipo de políticas sociales son necesarias para la Nueva Era?
- ¿Cómo pueden los responsables políticos equilibrar los imperativos morales con el pragmatismo para priorizar y alcanzar los objetivos sociales?
- ¿Y cómo pueden reevaluarse o ajustarse las prioridades políticas sin socavar estos objetivos en un mundo que cambia rápidamente?

A pesar de los avances logrados en algunos sectores, las políticas de bienestar social suelen limitarse a atender las necesidades inmediatas en lugar de orientarse a impulsar un cambio sistémico. Si se hace demasiado hincapié en los gastos a corto plazo, se corre el riesgo de crear sistemas duales: uno para los marginados, financiado con fondos públicos y sobrecargado, y otro para los privilegiados, privado y exclusivo. Estas divisiones profundizan la desigualdad y fracturan la cohesión social. Además, los recortes del gasto público, a menudo obligados por las restricciones presupuestarias, han disminuido los recursos para la protección social, incluso cuando la demanda sigue creciendo.

El CIBS, una organización no gubernamental mundial con una fuerte presencia nacional y una larga y orgullosa historia de defensa de una política social integrada y programas de bienestar eficaces hace hincapié en que las asignaciones presupuestarias para el bienestar social no son meros gastos, sino inversiones vitales para el futuro; además, esas inversiones se basan fundamentalmente en la solidaridad social. La mayoría de los objetivos y metas de desarrollo social son alcanzables si y sólo si existe voluntad política.

Como dice el adagio: "Donde hay voluntad, hay un camino", siempre que la sociedad reconozca la importancia crítica de estos objetivos. El camino a seguir reside en la valentía política para dar prioridad a estas inversiones y reconocer su poder transformador.

La participación ciudadana está en el centro de unos servicios sociales eficaces y con capacidad de respuesta. La participación genera transparencia y confianza, y fomenta el sentido de la responsabilidad compartida, garantizando que los servicios sociales aborden los retos y necesidades reales en lugar de basarse en suposiciones. Además, la sociedad civil sirve de plataforma vital para amplificar las voces de los más vulnerables, garantizando que sus preocupaciones se escuchen en el discurso público. Establecer o reforzar mecanismos formales que ofrezcan a los ciudadanos oportunidades regulares de contribuir a la toma de decisiones en una forma transparente y constructiva hace que los procesos participativos sean más inclusivos y eficaces.

Principios básicos

1. Bienestar social centrado en el ser humano

Los programas y servicios de bienestar social deben ser reconocidos como fundamentales para crear una sociedad humana. La mejora del bienestar humano y social debe ser un elemento central del desarrollo económico. Aunque los estatutos jurídicos y las definiciones específicas pueden diferir de un país a otro, el objetivo universal sigue siendo promover el desarrollo humano, garantizar la seguridad y fomentar la autonomía. El valor fundamental de la solidaridad sigue siendo central en todas las grandes regiones del mundo. Además, esto es coherente con el objetivo concurrente de lograr la protección social universal (PSU), que abarca funciones protectoras, preventivas y de desarrollo.

2. Integración de las políticas sociales y económicas

Las políticas de bienestar social son esenciales para el bienestar individual y comunitario, pero deben integrarse con políticas económicas más amplias. Se necesita un marco global que incluya la reducción de la pobreza, el pleno empleo, la protección social universal y el acceso a los servicios esenciales. Descuidar las dimensiones sociales de las políticas económicas socava el desarrollo sostenible y equitativo. Los gobiernos deben dejar de considerar las políticas sociales como redes de seguridad y reconocer su papel en el fomento de entornos económicos sostenibles, especialmente a la luz de la crisis climática que amenaza a comunidades de todo el mundo.

3. Innovative Social Policies

Los complejos retos actuales exigen políticas sociales innovadoras, participativas y flexibles para hacer frente a las crisis convergentes. Los gobiernos deben integrar las dimensiones sociales en las políticas macroeconómicas desde el principio, garantizando que el desarrollo económico beneficie a todos los miembros de una sociedad. Las políticas nacionales deben abordar las transiciones demográficas, como las migraciones y el envejecimiento de la población, fomentando un enfoque intergeneracional y reforzando la solidaridad entre generaciones. Hay que promover el diálogo entre generaciones, buscando formas y métodos de comunicación adecuados para las generaciones mayores y las más jóvenes. Al mismo tiempo, las políticas nacionales deben garantizar que la rápida transformación digital –impulsada por el crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y la comunicación– reduzca las brechas digitales en lugar de crear otras nuevas, empoderando a los individuos en lugar de marginarlos.

Ámbitos clave de actuación

Cuatro ámbitos prioritarios deben guiar las estrategias futuras:

A. Hacer frente a las consecuencias sociales del cambio climático

El cambio climático no es un fenómeno aislado, sino un amplificador de vulnerabilidades. Con frecuencia, sus efectos recaen de forma más aguda sobre los menos preparados para adaptarse. El cambio climático afecta de forma desproporcionada a las regiones vulnerables, especialmente en el sur de Asia y el sur de África, amenazando la agricultura, la salud y los medios de subsistencia. Integrar la sostenibilidad medioambiental en las políticas económicas y sociales es esencial para proteger a las comunidades de los desafíos inducidos por el clima. Es imperativo que todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, se concentren en la plena aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, reforzando la solidaridad y la acción colectiva.

B. Fomento del empleo y del crecimiento económico integrador

El desarrollo social no puede prosperar sin un desarrollo económico que beneficie a todos; el crecimiento económico integrador es un requisito previo para la sostenibilidad. Las políticas deben dar prioridad a los grupos marginados -mujeres, jóvenes, minorías étnicas y personas con discapacidad- y garantizar un acceso equitativo a los recursos, las oportunidades, los servicios y los medios de subsistencia. Los gobiernos disponen de una amplia caja de herramientas: fiscalidad progresiva, legislación laboral y salarios justos, e inversiones estratégicas en sanidad, educación y vivienda, que pueden reducir las diferencias de riqueza y crear vías hacia la estabilidad y la cohesión social.

La rápida expansión de las tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial (IA), presenta tanto oportunidades como retos para los responsables políticos y la sociedad civil. La transformación digital tiene el potencial de mejorar y diversificar la participación ciudadana. Sin embargo, los países deben navegar por las complejidades de la transformación digital al tiempo que abordan sus consecuencias sociales, como el desplazamiento del empleo y la concentración de la riqueza. La aplicación de medidas sólidas de protección social para los afectados por la pérdida de puestos de trabajo y la garantía de una fiscalidad justa de los beneficios generados por la IA a fin de redistribuir los beneficios en toda la sociedad son consideraciones esenciales.

C. Protección social universal

La seguridad social es un derecho humano fundamental, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948). Instamos a los gobiernos a crear sistemas integrales que proporcionen seguridad en todas las etapas de la vida. Las garantías básicas para el acceso universal a la asistencia sanitaria esencial y las garantías de ingresos en situaciones de desempleo, vejez, cuidado de niños, discapacidad, viudedad y orfandad, enfermedad y maternidad, son medidas para salvaguardar a los individuos contra las incertidumbres de la vida, al tiempo que fomentan el bienestar mental y físico y potencian su participación en las actividades productivas de la nación. La protección social universal no es caridad; se basa en la justicia y representa la mejor inversión que una sociedad puede hacer en su población.

D. Capacitación humana

Las políticas deben capacitar a las personas para participar plenamente en las dimensiones económica y social de la sociedad. Para ello es necesario promover la educación de calidad, la formación profesional y el aprendizaje permanente, en particular para las mujeres, los jóvenes, las minorías y las personas con discapacidad. La igualdad de género, la creación de empleo y el apoyo a industrias sostenibles como las energías renovables y la agricultura sostenible son de vital importancia.

La educación es esencial no solo para cumplir los compromisos básicos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sino también para elevar los niveles educativos y promover un aprendizaje de alta calidad. Desempeña un papel crucial para fomentar el pensamiento crítico y hacer frente a los crecientes retos de la desinformación y la desinformación, que se han convertido en preocupaciones acuciantes en el mundo actual.

Orientaciones para el futuro

Las políticas de bienestar social deben evolucionar para convertirse en catalizadores de la equidad y la justicia, integrando los objetivos sociales en marcos macroeconómicos que abarquen dimensiones medioambientales y fomenten la cooperación internacional. Las propuestas basadas en datos empíricos pueden ayudar a los gobiernos a abordar la pobreza, el desempleo y la desigualdad mediante políticas de bienestar social eficaces. Estas políticas deben mejorar el potencial humano, allanando el camino hacia un sistema global justo, inclusivo y sostenible.

La Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social no puede ser un mero ejercicio de retórica. Debe ser un punto de inflexión. Las soluciones pragmáticas y los compromisos políticos constructivos son esenciales para hacer frente a la actual crisis del coste de la vida, proteger a los grupos vulnerables e invertir el declive de los indicadores de bienestar. Sin embargo, seamos claros: los compromisos políticos no deben ir en detrimento de la dignidad y los derechos de las personas. Es necesario reforzar la dinámica participativa, elemento clave para garantizar los derechos de los ciudadanos

Multilateralismo y colaboración

La colaboración entre las partes interesadas, tanto a nivel nacional como internacional, es fundamental para abordar los retos globales compartidos. Igualmente crítico es fomentar esta colaboración a escala internacional, donde el intercambio de buenas prácticas permite a los países aprender de los éxitos y reveses de los demás en la aplicación de políticas sociales. La cooperación regional, a menudo facilitada por instituciones multilaterales, permite a los responsables políticos abordar retos transfronterizos como el control de enfermedades infecciosas y las desigualdades educativas agravadas por la migración y la pobreza. Aunque las instituciones y los acuerdos multilaterales se enfrentan a importantes retos, es esencial reconocer que los desafíos globales requieren soluciones globales.

El multilateralismo es indispensable para abordar los retos globales compartidos, y el CIBS apoya firmemente la colaboración multilateral en los sectores sociales y más allá. Por ejemplo, los países con reformas exitosas en sanidad, educación o protección social pueden servir como modelos que otras naciones adapten a sus contextos. Como demuestra la experiencia del CIBS, los acuerdos multilaterales regionales pueden promover normas uniformes, fomentar el intercambio de recursos y la transferencia de conocimientos tecnológicos y humanos, y ayudar a evitar las disparidades derivadas de las diferentes capacidades nacionales. En última instancia, la eficacia del multilateralismo en la configuración de la política social depende del compromiso de las naciones de aplicar equitativamente las normas acordadas y de aprovechar eficazmente el apoyo multilateral. A través de estas acciones, los países pueden fortalecer su infraestructura social y ampliar las oportunidades de inclusión para todos los ciudadanos.

El establecimiento de mecanismos intergubernamentales sólidos, como reuniones ministeriales periódicas, puede mejorar la colaboración mundial y garantizar la responsabilidad en la aplicación de las políticas de bienestar social. Estas reuniones deben estar bien informadas y utilizar metodologías y procedimientos de vanguardia. Al recopilar datos precisos y previsiones pertinentes, tomar decisiones racionales y emprender una programación operativa eficaz, estos mecanismos deberían promover la innovación, la equidad y la eficiencia. Creemos firmemente que la asistencia social debe cumplir su transformación de medida reactiva en herramienta estratégica para el desarrollo sostenible.

Colaboración y coordinación mundiales

La colaboración y coordinación mundiales son esenciales para garantizar un acceso equitativo a los bienes y servicios públicos sociales fundamentales. Una plataforma internacional sólida podría servir de catalizador de tales esfuerzos, facilitando el acceso universal a la atención sanitaria y reforzando la seguridad sanitaria mundial, especialmente en la lucha contra las pandemias. También podría promover una educación de calidad equilibrando los contenidos locales con las normas mundiales, garantizando una financiación adecuada, la formación del profesorado y el acceso a los recursos de aprendizaje. Además, un sistema mundial de seguridad social podría garantizar unos niveles mínimos de protección social para todos, mientras que la aplicación de las normas laborales internacionales defendería unas condiciones de trabajo justas y equitativas. Una gestión mundial eficaz del agua salvaguardaría aún más este recurso crítico, garantizando la sostenibilidad y la distribución equitativa.

Al fomentar la cooperación entre organismos gubernamentales e intergubernamentales, una plataforma de este tipo también podría facilitar el intercambio de investigaciones y buenas prácticas en materia de bienestar social, así como la coordinación con sectores sociales clave.

En este sentido, **la reactivación de las reuniones anuales de Ministros de Bienestar Social**, aprovechando plataformas como la Comisión de Desarrollo Social de la ONU o eventos independientes, puede dar el impulso necesario a la cooperación mundial en cuestiones de bienestar social, promoviendo la dignidad humana, el bienestar, la inclusión y la justicia social, traduciendo en acciones concretas los compromisos asumidos en la Cumbre de Copenhague y los que surjan de la Segunda Cumbre Social de 2025.

El CIBS es miembro fundador de la Coalición Mundial por los Pisos de Protección Social y apoya activamente esta iniciativa mundial de la sociedad civil que reúne a más de 130 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo y cuyo objetivo es lograr la protección social universal. Estamos firmemente unidos a los profesionales del desarrollo social, los

trabajadores sociales, los educadores y los académicos que dan prioridad a la atención y la acción en materia de seguridad social y bienestar humano. Juntos, aspiramos a lograr una protección social universal que incluya programas y planes que tengan en cuenta a los niños. Abogamos firmemente por el inicio de debates prácticos en la ONU para desarrollar **un instrumento internacional vinculante para la Protección Social Universal.**

El CIBS cree que es crucial que la comunidad internacional adopte políticas sociales con visión de futuro, equitativas e inclusivas a nivel mundial, regional, nacional y local. La dignidad y el valor humanos deben guiar estas políticas, que deben abordar las realidades del mundo interconectado actual. Abordar las causas profundas de la desconfianza es esencial para romper los círculos viciosos que perpetúa. Una sociedad civil bien informada, activa y comprometida es esencial para el desarrollo socialmente sostenible, la democracia y la realización de los derechos humanos. Invertir en una sociedad civil fuerte, diversa e independiente sienta las bases para alcanzar estos objetivos. La sociedad civil también desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento de la seguridad, especialmente durante las crisis, donde su capacidad para proporcionar ayuda humanitaria es indispensable.

En el contexto actual es imperativo diseñar políticas sociales realistas, pero audaces y sostenibles. Para promover el desarrollo sostenible y la cohesión social es vital contar con políticas sociales eficaces que impliquen de manera significativa a los ciudadanos, las comunidades locales, las entidades regionales y la comunidad mundial.

El CIBS está dispuesto a apoyar este esfuerzo.



CIBS

Gracias